

Abogado de víctimas del 2-F prepara querellas contra Senapred y Delegación

MEGAINCENDIO. En tanto, la querella presentada contra la alcaldesa Ripamonti fue agrupada a la investigación central que lidera la Fiscalía.

Gian Franco Giovines D.
 gian.giovines@mercuriovalpo.cl

Un duro golpe mediático e institucional supuso la detención en el mes de mayo del exbrigadista de Conaf, Franco Pinto (31), y de Francisco Mondaca (22), en ese entonces funcionario de la 13ª Compañía de Bomberos de Valparaíso, quienes son sindicados por la Fiscalía como los presuntos autores intelectuales y materiales, respectivamente, de los cuatro focos en el Fundo Las Tablas, que derivaron en el megaincendio que terminó con 137 vidas en Viña del Mar como en Quilpué.

Sin embargo, tres meses después de aquel hito de la investigación que encabezan el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, la indagatoria no termina de convencer a los abogados querellantes de las víctimas, quienes exigen la identificación de los responsa-

137

personas fallecidas dejó la tragedia de febrero, con víctimas en Viña del Mar y en Quilpué.

“A partir de la información que hemos recopilado, tenemos un convencimiento total de que hay otras autoridades responsables”.

Luis Cantellano
 Abogado querellante

bles administrativos, ya sea en la prevención, como en la respuesta a la emergencia.

CUESTIONAMIENTOS

En este sentido, Luis Cantellano, abogado representante de las 4 víctimas del Jardín Botánico y quien en febrero presentó una querella contra la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y contra el director del recinto, Alejandro Peirano, cuestiona que la indagatoria se ha centrado en perseguir a los autores del incendio, pero no en la determinación de las responsabilidades administrativas de las autoridades encargadas de prevenir y responder a la emergencia.

“En lo personal, tengo una sensación de que aquí existe

“Nuestra convicción es que existen responsabilidades penales más allá de los dos imputados que se encuentran en prisión preventiva”.

Felipe Olea
 Abogado querellante

un trabajo que está conducido por la Fiscalía, pero respecto a determinar los autores materiales e intelectuales. Un poco se han olvidado de la otra parte, que dice relación con la implementación de todas las medidas de mitigación previa, que obviamente son responsabilidad de las autoridades”, arguye Cantellano.

Subraya que “si bien la Fiscalía está hoy día más preocupada de determinar quiénes son los autores materiales e intelectuales, nosotros estamos más vinculados a determinar la responsabilidad de las autoridades en esta querella. Ese es nuestro objetivo”.

En cuanto a la querella presentada por Cantellano contra la alcaldesa Ripamonti y el di-



LA CAUSA PENAL POR LAS MUERTES REGISTRADAS AL INTERIOR DEL JARDÍN BOTÁNICO SE MANTIENE ABIERTA.

rector del Jardín Botánico, el Ministerio Público decidió agrupar la causa a la investigación central del siniestro, la misma que formalizó a los dos autores materiales e intelectuales del incendio de febrero.

PREPARAN MÁS QUERELLAS

Al margen de la acción penal contra la alcaldesa, el abogado Cantellano adelantó que se encuentra evaluando nuevas acciones judiciales contra otras instituciones como Senapred, Conaf, el Ministerio de Agricultura, la Delegación Presidencial Regional y el Gobierno Regional, por sus eventuales res-

ponsabilidades en el incendio. Detalló que en este trabajo su equipo ha invertido varios meses de investigaciones.

“A partir de toda la información que hemos recopilado de febrero, tenemos un convencimiento total de que hay otras autoridades responsables, que hoy no se han tocado”, señala el jurista.

Por otro lado, el abogado, Felipe Olea, quien representa a familias de 40 personas fallecidas y más de 300 afectados que perdieron su vivienda, expone que “nuestra convicción es que existen responsabilidades penales más allá de los dos

imputados que se encuentran en prisión preventiva, especialmente en los organismos que tuvieron a su cargo la gestión de la emergencia, tanto de forma preventiva como en el momento de la catástrofe”.

“Dicho esto, creemos que existe la necesidad que se formalice a las autoridades que fallaron en sus competencias, que a la luz de lo informado en las diversas investigaciones, especialmente la de la Cámara de Diputados, se radica en las autoridades regionales de la Corporación Nacional Forestal y la administración de la alcaldesa Ripamonti”, concluyó. **CS**